

El Patronato de La Fundación Villacisneros, felizmente presidido por don Iñigo Gómez - Pineda Goizueta, ha decidido concederme su premio anual, en reconocimiento de los esfuerzos que he hecho en mi patria en defensa de la Justicia, de la Democracia, de la Libertad y del Estado de Derecho. Tan dichosa ocasión me proporciona, además, la gratísima oportunidad de compartir este momento con un auditorio conformado por amigos muy queridos, y la oportunidad así mismo de exponerles mi visión sobre un tema que tanto ha afectado la vida de los colombianos, y cuyo análisis y decisión de enfrentarlo coinciden con los objetivos fundamentales que inspiran esta Fundación: La lucha contra el terrorismo y la impunidad, y la necesidad de que se haga Justicia, se castigue a los responsables y se repare e indemnice a las víctimas.

La Fundación, que es una iniciativa de la sociedad civil de carácter estrictamente privado, tiene dentro de sus objetivos principales crear conciencia entre los españoles sobre las obligaciones que tiene esta sociedad con las víctimas del terrorismo, las que tienen ante todo el derecho a que se conserve la memoria de los actos criminales que les dañaron sus vidas, a recuperar su dignidad y a que se haga Justicia, llevando ante los tribunales a sus victimarios. De manera similar, mi acción política en Colombia en los últimos años ha estado inspirada en la necesidad de que se aplique Justicia a los criminales, se repare a las víctimas, se recupere la lucha de toda la sociedad contra el narcotráfico y se combata sin debilidades al terrorismo. Me satisface enormemente, entonces, coincidir plenamente con ustedes.

Solo cuando se haga Justicia podremos decir que están cerradas las heridas y los odios, porque solo con una justicia pronta y eficaz se apagan los deseos de venganza y de retaliación: Justicia y reparación, es la fórmula para evitar revanchas futuras y para llegar a una paz estable y duradera.

A los criminales hay que sentarlos en el banquillo de los acusados y juzgarlos conforme a las leyes propias de un Estado de Derecho. Creer, como infortunadamente se cree hoy en algunos sectores de la sociedad colombiana, que se puede cambiar impunidad por paz, es una malsana utopía, que solo logrará sembrar las simientes de una nueva violencia. Porque mientras no haya Justicia, el rencor, y el deseo de venganza, rugirán en los corazones de las víctimas. Nada perdurable se construye sobre la injusticia.

El terrorismo en Colombia - ese monstruo aterrador que a lo largo de cinco décadas ha sembrado de dolor, de tragedia y de muerte los campos y las ciudades de mi patria - nació y se fortaleció abrevando en dos grandes fuentes: La primera, una ideología perversa que desde el triunfo de los Castro en Cuba

a finales de los años cincuenta del siglo pasado, pretendió expandir por todo el continente americano el modelo comunista, que Hugo Chávez, en Venezuela, bautizó después como "Socialismo del Siglo XXI" y que sumió en la miseria y la opresión a uno de los pueblos más ricos de Latinoamérica. Pero el modelo cubano, con la única excepción de Venezuela, no logró llegar al poder por la vía electoral en ninguna parte. En cambio, proliferaron los grupos guerrilleros de orientación marxista, que pronto fueron derrotados por los ejércitos regulares en todos los países, menos en Colombia, por complejas razones que no es el caso examinar en esta ocasión. Y la segunda, el narcotráfico, cuyo control de vastas zonas de nuestro territorio proporcionó, tanto a las agrupaciones guerrilleras como a los grupos que después surgieron desde la ilegalidad para combatirlos, organizaciones que en el lenguaje popular de nuestro país llamamos "paramilitares", una inmensa cantidad de dinero que les permitió expandirse por todo el país y controlar porciones considerables de nuestras selvas y montañas, cuyo acceso, incluso para los helicópteros militares, es muy difícil.

Yo he sido una víctima directa del terrorismo. Fui secuestrado en Bogotá por los sicarios de Pablo Escobar cuando adelantaba mi campaña para la alcaldía de la capital, y al día siguiente de mi secuestro fui trasladado en helicóptero a una finca en el departamento de Antioquia, el principal centro de operaciones del Cartel de Medellín. Los días que pasé en poder del tenebroso capo fueron terribles, entre otros aspectos, porque las autoridades militares y de policía me seguían buscando en Bogotá. A los pocos días, Escobar secuestró al doctor Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación, quien fue herido en el momento de su plagio. Gracias a Dios, una patrulla de la Policía que hacía parte de un gigantesco operativo que se desarrollaba en Antioquia en busca del señor Procurador, llegó hasta la finca donde me tenían encerrado sin saber que yo estaba allí, y en ese instante en que mi vida pendió de un hilo, pues los secuestradores tenían orden de matarme si se presentaba un intento de rescate, logré negociar mi vida por la de ellos. Un heroico policía aceptó canjearse conmigo y acompañar a los secuestradores en su huida, en calidad de rehén, y así logré salir con vida del episodio. Al saber Escobar este desenlace dio orden de asesinar al doctor Hoyos.

Posteriormente, cuando ejercí la presidencia de la República, los eficientes servicios de seguridad encargados de mi protección detectaron e impidieron la ejecución de noventa y siete atentados contra mi vida. De modo que tengo autoridad, mucha autoridad moral, para hablar de terrorismo.

Como ustedes seguramente saben, el presidente Santos, de espaldas a la opinión pública y en forma completamente inesperada, decidió entablar con las FARC, el mayor grupo narcoterrorista del país, considerado por entonces como el mayor cartel de drogas del mundo, un proceso de diálogo en la ciudad

de La Habana, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz. Tras muchos meses de negociaciones, de cuyo desarrollo casi nada se informó a la opinión pública, el gobierno, de manera unilateral y violando abiertamente la Constitución que había jurado defender, firmó con la mencionada agrupación terrorista un acuerdo que, sometido luego a la aprobación del pueblo a través de un plebiscito, fue rechazado por los colombianos. No obstante, y atropellando la voluntad soberana de nuestros compatriotas libremente expresada en las urnas, Santos impuso su acuerdo, avalado por un congreso dócil a sus mandatos y sometido a su voluntad gracias a múltiples prebendas ilegales entregadas individualmente a los congresistas. Y avalado también por una Corte Constitucional que despojó de su venda a la Justicia e inclinó su balanza a favor del gobierno.

Me enorgullece haber participado y liderado, al lado del señor expresidente Álvaro Uribe, las víctimas y los cristianos, lo que se llamó el "Gran Movimiento por el NO". Casi seis millones y medio de colombianos de todos los sectores de la vida nacional, nos acompañaron en una campaña absolutamente desigual en la que sin dinero, con todos los medios de comunicación en contra, aplastados por todo el poder del Estado que se movilizó para derrotarnos, con los grandes gremios del sector privado apoyando abiertamente al SÍ, con el presidente Santos atemorizando a todos los colombianos al anunciar que si ganaba el NO al otro día las FARC iniciarían una feroz arremetida terrorista en las ciudades, contra los pronósticos de todos los encuestadores, solos contra una apabullante oleada publicitaria que nos tachaba de "enemigos de la paz", ganamos el plebiscito. Y ganamos porque las mayorías nacionales comprendieron y apoyaron nuestra lucha por la Libertad, por la vigencia del Estado de Derecho, por la exigencia de que hubiera Justicia y reparación real a las víctimas.

Pero el Estado colombiano, y lo digo con dolor de patria, desconoció el resultado del plebiscito. Desconoció la voluntad democrática del pueblo. Y pasando por encima del resultado del plebiscito, el presidente Santos impuso su malsano acuerdo de paz con las FARC.

El Acuerdo de Paz firmado por el presidente Santos con las FARC es un indigerible mamotreto de más de 300 páginas, en el que lo primero que echa uno de menos es el respeto a las reglas básicas de la gramática española, un esperpento que muy pocos colombianos hemos tenido el heroísmo de leer. Contiene disposiciones que además de violar abiertamente la Constitución Nacional, son absolutamente inaceptables para una nación civilizada que se precie de respetar el Estado de Derecho y la Justicia. Me refiero, entre otras, a las que elevan el narcotráfico a la categoría de delito político, lo que les garantiza la impunidad a quienes envenenaron y siguen envenenando con su basura a millones de jóvenes en el mundo entero, incluyendo, desde luego, a

España; A las que permiten que los autores de los mayores crímenes de la historia de Colombia, a quienes violaron y esclavizaron a miles de niñas y de niños, a quienes asesinaron y mutilaron indiscriminadamente a miles de campesinos, incluyendo muchos niños, soldados y policías, con minas "quiebrapatras", sembradas en senderos y cultivos, queden impunes; Que igualmente queden impunes quienes secuestraron y torturaron a multitud de ciudadanos, tanto civiles como militares y policías; A las que permiten que los autores de estos crímenes contra la humanidad puedan ser elegidos congresistas y hasta presidentes de la República sin purgar ni un solo día de cárcel: De hecho, en las recientes elecciones para Congreso que se llevaron a cabo el pasado 11 de marzo, las FARC eligieron cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, no porque así lo haya dispuesto la voluntad popular, sino porque el Acuerdo les otorgó gratuitamente esta representación. Cabe mencionar que en una votación total que superó los 17 millones, las FARC apenas obtuvieron un poco más de 85.000 votos.

Menos del 0.5% de la votación total. A eso se reduce el gran apoyo que proclamaban tener en las bases populares. Por un precio tan pírrico entregó el gobierno de Santos nuestropreciado Estado de Derecho.

Me refiero, en fin, a las normas que le permiten a las FARC conservar intacta su enorme fortuna, camuflada a través de testaferros tanto en Colombia como en el exterior. Como se habían comprometido a entregar un inventario de sus bienes que deberían destinarse a la reparación de sus víctimas, los guerrilleros, en un gesto de desprecio y de burla humillante a todo el pueblo colombiano, entregaron una lista que incluía elementos tales como escobas, toallas, calcetines, baldes de plástico, y al mismo tiempo que declaran que no tienen con qué comer, la Fiscalía General de la Nación ha expropiado haciendas, casas, apartamentos, empresas, cuyo valor asciende a muchos miles de millones de pesos, cuyos supuestos propietarios son en realidad testaferros de esa organización terrorista. Así se han burlado de la buena fe del pueblo colombiano. Así han violado tanto la letra como el espíritu del acuerdo que firmaron. Pero lo más indignante es que no pase nada, que todos los días la Fiscalía descubra nuevos bienes en poder de testaferros, sin que eso tenga consecuencias contra los mandos de la subversión.

Pero hay algo más: en una tergiversación total de los valores políticos, éticos y morales que deben regir una sociedad libre, primero el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia y luego el propio presidente Santos manifestaron su esperanza de que "ojalá la Justicia no sea un obstáculo para la paz." E inspirados en este criterio procedieron a sacrificar la Justicia ante el nuevo "becerro de oro", como hicieron los israelitas cuando desdeñaron las Tablas de la Ley y se entregaron a la adoración de sus ídolos falsos.

Ante el hecho indiscutible de que los comandantes guerrilleros y muchos de sus soldados y de sus colaboradores son reos de los más graves delitos de lesa humanidad, y ante la circunstancia, para ellos inmodificable, de que las normas del Derecho Penal Internacional no permiten amnistiar ni indultar estos delitos, con imaginación digna de mejor causa se inventaron una “Justicia Especial para la Paz”, cuyos objetivos eran inicialmente dos: Uno, evitar que la Corte Penal Internacional, cuya competencia, como ustedes saben, es subsidiaria, en el sentido que solo actúa si la justicia interna no puede o no quiere procesar a los autores de delitos atroces, juzgara a los comandantes de las FARC. Para lograr este torvo propósito montaron un remedo, una parodia de justicia, que los condenará a penas ridículas, irrisorias, para salvarlos de la jurisdicción de la Corte Internacional, luego de un proceso más propio de un espectáculo de circo que de un tribunal de justicia. Y digo esto porque ninguno de los autores de esos delitos pagará un solo día de cárcel: Para ellos se prevén “penas” tales como ayudar a reparar una escuelita, darle mantenimiento a alguna carretera rural, etc. Lo cual, considerando la gravedad de los delitos cometidos, es una burla, una burla dolorosa y cruel a las víctimas.

El segundo objetivo era procesar ante ese tribunal espurio a todos aquellos que la misma Justicia Especial considerara autores o cómplices de los delitos atroces, con lo cual pretendían procesar a importantes empresarios, industriales, periodistas, e incluso a los expresidentes de la república que fueran un obstáculo en el camino de la extrema izquierda hacia la toma del poder. El expediente era muy fácil: Bastaba con acusarlos de haber instigado, patrocinado o financiado a grupos paramilitares para que le pusieran la soga al cuello a cualquier ciudadano. Afortunadamente la reacción de la opinión pública fue tan fuerte y firme que esta segunda posibilidad fue suprimida.

La Justicia Especial para la Paz ha sido constituida como una jurisdicción totalmente autónoma e independiente, por fuera y por encima del poder jurisdiccional establecido por la Constitución, de tal manera que sus decisiones no podrán ser revisadas ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia. E integrada única y exclusivamente por abogados de reconocida militancia de izquierda. De todo esto solo podemos esperar males para la República.

Pretender que la paz esté por encima de la justicia, o que es posible la convivencia pacífica doblegándose ante los violentos, garantizándoles la impunidad y el disfrute de sus riquezas manchadas de sangre, otorgándoles gratuitamente el derecho a participar en las más altas dignidades que otorga la democracia, solo para que dejen de delinquir, es una total y absoluta insensatez. Como diría don José Ortega y Gasset, uno no puede pretender que la carreta funcione si la coloca delante de los bueyes.

La experiencia milenaria de los pueblos nos enseña que solo las sociedades que han logrado un nivel aceptable de Justicia se han ganado el derecho a vivir en paz. Pero no conozco ninguna nación que haya triunfado aplicando el modelo contrario, que haya logrado una paz perdurable poniendo la administración de justicia en las manos de los depredadores, como se pretende en Colombia.

¿Qué nos ha dejado todo esto hasta ahora? ¿Qué podemos esperar los colombianos en el futuro inmediato?

No es cierto, como proclama la propaganda oficial, que en Colombia reine la paz. Hemos sacrificado la Justicia, hemos garantizado la impunidad a los criminales, pero no hemos conseguido la Paz. Se nos dijo que con la firma del acuerdo se acabaría el narcotráfico, pero las últimas cifras disponibles, suministradas por la ONU, demuestran que hemos batido todos los récords en materia de área sembrada de coca. Las FARC incumplieron su palabra de contribuir a erradicar los cultivos, y por el contrario, obligaron al gobierno a terminar la erradicación forzada para sustituirla por un ingenuo programa de erradicación voluntaria, como si fuese posible convencer a los campesinos que cultivan coca de abandonar voluntariamente un negocio que es infinitamente más rentable que cualquiera otro legal. No entregaron información sobre las rutas que utilizan para exportar la cocaína hacia los EU y Europa. No han dado información ninguna sobre sus socios de los carteles mexicanos, norteamericanos y europeos. Tampoco, como ya lo dijimos, han entregado un solo dólar para reparar a sus víctimas, y por el contrario, con la mayor desfachatez, afirman ahora que la reparación es una obligación del Estado.

Tal parece que el legado que Santos le dejará al mundo serán las 250.000 hectáreas sembradas de coca que los organismos internacionales han detectado. Nunca en la historia sangrienta del narcotráfico el negocio había estado tan floreciente.

Un número considerable de elementos de las FARC se han "rebelado" contra los acuerdos y han seguido delinquiendo como supuestos "disidentes". En verdad no sabemos si son disidentes o una retaguardia que los comandantes de la guerrilla dejaron estratégicamente ubicada en las zonas que producen más coca. Otros grupos simplemente se cambiaron de brazalete y ahora delinquen como integrantes del Ejército de Liberación Nacional - ELN - la otra agrupación guerrillera actuante en Colombia, que sigue asesinando policías, soldados y civiles y causando daños irreparables a nuestro ecosistema, destruyendo los oleoductos que transportan el petróleo y derramando el crudo sobre nuestras fuentes de agua. Ya sabemos que el ELN ha crecido exponencialmente desde que las FARC se "desmovilizaron."

Queridos amigos: Como ustedes podrán apreciar, no es cierto que la amenaza terrorista haya desaparecido en Colombia. El monstruo sigue ahí, amparado por la impunidad, alimentado por el narcotráfico, escondido entre los párrafos de un Acuerdo de Paz contrario a la Constitución y a la voluntad de los colombianos.

Seguiremos luchando por contenerlo. Con el presidente Uribe hemos conformado una gran coalición de centro derecha que en desarrollo de los pactos que hicimos ya seleccionó en consulta popular al Dr. Iván Duque como candidato presidencial, y a la doctora Martha Lucía Ramírez como su fórmula para la vicepresidencia. Nuestra meta es ganar las elecciones presidenciales para recuperar la Constitución, restablecer el Estado de Derecho, hacer justicia contra los criminales, y garantizarle a nuestro pueblo que los estandartes de la Libertad y de la Democracia seguirán ondeando en el horizonte de Colombia.

A la Fundación Villacisneros, a mi grande y muy querido amigo don Íñigo Gomez - Pineda Goizueta, a doña María San Gil, cuyo valor y patriotismo tanto admiro, a mi querida Rocío Gómez Pineda, directora ejecutiva, y a todo el personal de esta meritoria institución, gracias, muchas gracias.

Desde luego, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.

Este premio no es solamente para mí: Es para millones de colombianos anónimos, honestos, honrados, que día a día luchan por sacar adelante a sus familias, a su país, y que esperan de sus dirigentes compromiso, decisión y arrojo en la lucha eterna por la Libertad, por el Estado de Derecho, por la Justicia, por la Democracia.

Esta es nuestra lucha, queridos amigos. Y también es la de ustedes.

Muchas gracias